

EL FRACASO DEL AUTORITARISMO DESARROLLISTA Y DE LOS POPULISMOS (1966-1976) – CAPITULO 5

El fracaso del autoritarismo desarrollista y de los populismos (1966-1976). (Belini y Korol)

En 1966 la dictadura militar establecida, que en respuesta a los ciclos de “stop and go”, aplicó una política económica con rasgos heterodoxos, destinada a frenar la inflación, acelerar la integración vertical del sector manufacturero y tocarlo de mayor eficiencia económica. Tres años más tarde, el Cordobazo desató una crisis de legitimidad del Onganiato y empezó una era de movilizaciones populares. Entre 1973 y 1974, Perón implementó el Pacto Social, que era un acuerdo entre capital y trabajo destinado a quebrar la dinámica inflacionaria, promover la redistribución progresiva del ingreso y alentar el crecimiento económico. El estallido de la hiperinflación en 1975 marcó el fracaso de este nuevo plan.

El periodo de madurez del modelo mercado internista

A mediados de la década de 1960, la economía argentina comenzó a superar las trabas que habían limitado su desarrollo. El agro pampeano dejó atrás su estancamiento e inició un periodo de crecimientos sobre la base de notables transformaciones productivas y tecnológicas. Además, los valores de las cotizaciones de los productos del agro, en el plano internacional, fueron mejorando. Esto dio valor y volumen a las exportaciones argentinas. La industria comenzó a exportar productos, desarrollando así su capacidad competitiva y aliviando el problema de la escasez de divisas.

Superados los efectos de la crisis de 1962-1963, empezó una etapa de crecimiento sostenido, hasta 1974. La tasa de crecimiento fue del 5% y hubo un aumento sostenido de la inversión en maquinaria y equipos.

El desempeño del sector industrial continuó dependiendo del mercado interno, donde colocaba la mayor parte de su producción. La supervivencia de gran parte del sector industrial dependía de la protección oficial y su crecimiento requería políticas macroeconómicas consistentes, no siempre posibles en un contexto de agudos enfrentamientos sociales y políticos.

La crisis del petróleo en 1973 tuvo efectos sobre la economía mundial y la local. Esto puso al descubierto algunas de las debilidades de la economía argentina. En 1975, el Rodrigazo cerró el ciclo decenal de crecimiento y sumergió al país en la depresión y la hiperinflación.

Las políticas económicas.

El onganiato y el tiempo económico

El 28 de Junio de 1966, las FFAA se hacen con el poder de la presidencia de la nación. Y designan a Onganía como presidente, para representar la “Revolución

Argentina". Este gobierno militar era un régimen sin plazos ni términos, ya que buscaba transformar la estructura económica y el orden político.

Las pronunciadas fluctuaciones de la actividad económica, los desequilibrios cíclicos de la balanza de pagos, las violentas transferencias de ingresos intersectoriales y la alta inflación eran concebidos como síntomas de problemas económicos que requerían soluciones estructurales. Se entendía que la democracia de partidos no garantizaba la estabilidad imprescindible para asegurar el progreso económico. El nuevo orden autocrático decía que era preciso disciplinar a los sectores populares y sus organizaciones, especialmente los sindicatos.

El régimen se dividía en 3 etapas:

1. Economía: La hora de impulsar la estabilización de la economía y el crecimiento
2. Social: Redistribución y conformación de nuevas organizaciones sociales, amparadas por el Estado
3. Político: Se iba a desarrollar luego de que sea alcanzado la modernización de la sociedad.

El primer ministro de economía fue Salimei, en donde la política salarial y laboral del gobierno provoco desilusión en los empresarios y el capital extranjero, ya que no logro revertir la recesión económica, la caída de la inversión ni la inflación (que rozaba el 32%). El gobierno se lanzo a conquistar la adhesión de algunos sectores del sindicalismo. Salimei tuvo el apoyo de los sindicalistas proclives a la negociación, denominados "participacioncitas" y cierto respaldo por parte del vandomismo (Peronista) y los grupos sindicales fieles a Peron.

Pero presionado por las empresas y en medio de una ola de rumores sobre la inquietud reinante en las FFAA, en 1966 se remueve a Salimei y se designa a Adalberto Krieger Vasena

El plan de Krieger Vasena (1967-1969)

El principal objeto era detener la espiral de precios y salarios. El diagnóstico oficial sostenía que se trataba de una inflación de costos, cuyo origen radicaba en el agudo conflicto distributivo entre empresarios y trabajadores. Krieger Vasena buscaba evitar las bruscas transferencias de ingresos que este tipo de medidas solía provocar.

En primer lugar, se dispuso una devaluación de la moneda del 40%, una magnitud que, según el ministro, permitiría que sea "la última devaluación", compensada por la ampliación de las retenciones a las exportaciones de los productos primarios y un programa de reducciones arancelarias destinado a corregir la protección excesiva sobre el sector industrial. Se buscaba, así, evitar que la devaluación tuviera un impacto desmedido sobre los precios internos y provocara una redistribución negativa del ingreso que deprimiera el mercado doméstico. Se estableció un impuesto excepcional a la tenencia de divisas.

En segundo lugar, se dispuso el reajuste de los convenios, la elevación de los ingresos hasta alcanzar el nivel de los salarios reales de 1966 y su congelamiento hasta diciembre de 1968. Para compensar, estas firmas serían beneficiadas por medio del crédito oficial y la aplicación de incentivos fiscales para la inversión. Esto trataba de reconocer el fracaso de las experiencias pasadas de control de precios, basadas en las medidas punitivas que afectaban principalmente el comercio mayorista y minorista.

También se estableció un severo programa de racionalización administrativa, de incremento de las tarifas de las empresas públicas y de los impuestos.

En mayo, el FMI aprobó un acuerdo *stand by*. A este le seguirían otros convenios para el otorgamiento de créditos destinados a financiar obras de infraestructura, que el gobierno consideraba clave para su programa de desarrollo, como la construcción de la central hidroeléctrica de El Choco (cerros Colorados), entre otras medidas.

Se intentaba contener la inflación a través de acuerdos con las grandes firmas. Y se aplicaba desde un comienzo una política monetaria y crediticia expansiva para favorecer la inversión privada.

En el corto plazo, los resultados fueron notables. La inflación descendió desde el 32% anual en 1966 al 7.6% en 1969. El congelamiento de precios y salarios y la aplicación de retenciones permitieron aminorar la caída del salario real. Las tarifas, con sus aumentos, aminoraron el déficit fiscal. Se redujo la demanda de crédito.

Entre 1967 y 1969, la tasa de incremento del PBI fue del 5% anual, con la construcción como estandarte.

La política oficial escondía algunos desequilibrios que impedirían su perduración más allá de 1969. En primer lugar, el mantenimiento de un tipo de cambio fijo y la inflación acumulada entre 1967 y 1969 provocaron una sobrevaluación de la moneda. El atraso cambiario perjudicó a los exportadores y si bien el gobierno eliminó gradualmente las retenciones impuestas en 1967 el tipo de cambio continuaba desalentando la producción agraria. Una caída del precio internacional de la carne provocó la reducción del precio interno, lo que generó una crisis ganadera. Estas condiciones acentuaron el estancamiento del sector primario y lanzaron los productores agrícolas y ganaderos a la oposición. También afectó a las exportaciones de los productos manufacturados.

La reactivación económica y el aliento a la inversión de capitales condujeron a un notorio despegue de las importaciones.

La apertura económica y el atraso cambiario también afectaron a la industria que elabora productos para el mercado doméstico. Se fortaleció el ingreso de grandes firmas extranjeras. La desnacionalización de un amplio sector de la industria localizó las críticas de las entidades empresarias.

La poca legitimidad del pueblo con el gobierno militar no permitió que el acuerdo por el congelamiento de precios y salarios se mantuviera durante mucho tiempo.

A pesar de que muchos sindicatos apoyaron el derrocamiento de Illia, para unirse a las fuerzas armadas, en 1968 la CGT se dividió. El ascendente predicamento de esta corriente implicaba un duro cuestionamiento, no solo a los sindicalistas “participacionistas” sino también a la posición del vanguardismo, siempre proclive al diálogo y negociación.

La sociedad rural también acentuó sus críticas sobre el programa económico que no parecía contemplar los intereses de los productores pampeanos.

El Cordobazo

El 29 de mayo de 1969 estalla el Cordobazo, una verdadera rebelión de obreros y estudiantes que se prolongaría hasta 1975. Desbordó a las organizaciones y derriba el mito del orden, principio fundador del Onganiato.

Era una fuerte explosión de repudio popular de los trabajadores de la industria automotriz mayormente. En la ciudad de Córdoba, las transformaciones sociales que acompañaban los programas de industrialización se podían ver claramente. El surgimiento, en la clase obrera, de un sector con puesto por trabajadores estables, calificados, que percibían remuneraciones relativamente elevadas surgió. Las grandes terminales habían alentado la negociación directa con los trabajadores mediante la creación de nuevos sindicatos, incluso organizados por planta, que se mantuviera fuera de la influencia de los sindicatos nacionales controlados por dirigentes peronistas (a los cuales se los acusaba de ser funcionales) que serían conocidos como la Burocracia Sindical. Así surge un nuevo sindicalismo, con prácticas más combativas y objetivos más amplios.

El Cordobazo provocó una aguda crisis política y quebró la confianza de las políticas económicas. Las maniobras especulativas se concentraron sobre el mercado cambiario, la fuga de capitales y la caída de la inversión, y la presión contra el peso se acentuó. Krieger Vasena se vio obligado a renunciar y lo reemplaza Pastore. Pastore compartía el enfoque económico de Krieger pero no contaba con su prestigio ni con sus relaciones en el mundo de las finanzas. Aunque afirmó que continuaría la política económica. La declinación de las reservas monetarias creaba perspectivas devaluatorias y el escenario político aportaba mayor inestabilidad.

Las manifestaciones se extendían a todo el país: cordoba, tucuman, cipolletti y rosario. En mayo de 1970, el secuestro y asesinato del general Aramburu por Montoneros convenció a los comandantes militares de la necesidad de derrotar al presidente.

Del liberalismo al nacionalismo económico (1970-1973)

El 8 de junio de 1970, las FFAA cogobernarían junto con el presidente, poniendo fin al Onganiato. Sería designado como presidente Levingston (solo duraría 9 meses, lapso en el cual la movilización se intensificó). Surgieron el sindicalismo ‘combativo’ y ‘clasista’, la racionalización de algunos sectores de las clases medias, la aparición de

nuevas organizaciones guerrilleras de tendencia peronista o de izquierda profundizaron la crisis de legitimidad de la dictadura militar.

Levingston llamó a profundizar la revolución y rechazo, por el momento, la posibilidad de elecciones libres. La política económica fue conducida primero por Llerena y luego por Ferrer, quien modificó el enfoque de la política económica y asumió posturas nacionalistas, favorables a las pequeñas y medianas empresas de capital nacional. Ferrer devaluó la moneda, expandió el gasto público, implanto la Ley de 'compre argentino' para los contratos del estado y flexibilizó la política crediticia para las empresas nacionales. Se aplicaron controles de precios e incluso se estableció una veda para la venta de carne. Se estableció el sistema de paritarias, en 1971, lo que permitió aumentos salariales que promediaron el 30%. La inflación subió de 14% en 1970 a 35% en 1972. La apertura nacionalista no pudo evitar la desaceleración del crecimiento del PBI que pasó del 8,5% de 1969 a 3% entre 1970 y 1972.

En marzo de 1971, Lanusse destituyó a Levingston e inicio el lento camino hacia la normalización institucional del país. La prioridad del gobierno militar era la política: buscando negociar una salida electoral que permitiera un traspaso del poder a un candidato aceptable para las FFAA. Pero a mediados de 1972, Perón reveló las negociaciones con Lanusse y condenó al Gran Acuerdo Nacional al fracaso. En noviembre, Perón retornó al país y poco después dio a conocer su decisión a favor de la candidatura de Cámpora por las elecciones de 1973.

El ministerio de economía desapareció como tal y sus funciones quedaron distribuidas entre varios ministerios y agencias públicas. Las políticas monetarias y crediticias expansivas se mantuvieron. El déficit público continuó aumentando la actividad económica se desaceleró. El gobierno militar, en 1972, otorgó aumentos salariales del 15% en 3 oportunidades, control de precios a artículos de la canasta familiar y retorno al sistema de acuerdos de precios con las grandes empresas. Pero aun así pudo evitar la inflación, que llegó al 58% en 1972. El comportamiento macroeconómico de este periodo estuvo muy condicionado por las tendencias de la economía internacional y, en el ámbito interno, por la búsqueda de una solución a la crisis política abierta en 1969.

El tercer gobierno peronista (1973-1976). La política económica de Gelbard y el Pacto Social

Las elecciones de marzo de 1973 dieron el triunfo a la candidatura del Frente Justicialista de Liberación, una alianza electoral con el peronismo, desarrollismo y otras fuerzas políticas menores. Cámpora asumió la presidencia, con quien dio un mensaje de apoyo a los nuevos movimientos de la juventud y de bajada de pulgar a los sectores tradicionales del gremialismo y peronismo. El conflicto político, que había enfrentado a los militares con Perón, se trasladó al interior del peronismo. La

composición del gabinete puso de manifiesto la intención de integrar también a los más conservadores, lo cual no evitó el conflicto ni la división del movimiento

Debido a los enfrentamientos armados entre las facciones de derecha e izquierda peronistas en Ezeiza, Perón presionó hasta lograr la renuncia de Cámpora y su vice. El país quedó provisionalmente en manos de Raúl Lastiri. Así, luego de volver al país, se presenta la candidatura de Perón Perón (Isabel), que gana las elecciones el 12 de octubre de 1973, aunque solo por ocho meses.

Entre mayo de 1973 y octubre de 1974, la política económica peronista estuvo conducida por Gelbard, ex CGE. La política oficial se basó en un acuerdo entre la CGT, la CGE y el ministerio de economía. Se impuso el Plan Trienal, una serie de proyectos que implicaban reformas de largo plazo y un plan de estabilización. Entre ellos, se alentaban cambios estructurales que destacaban la nacionalización del comercio exterior de carnes y cereales, la apertura al comercio con los países socialistas, la nacionalización de los depósitos bancarios, la reglamentación sobre las entidades financieras, un paquete de reformas impositivas, entre las que estuvo un impuesto a las tierras improductivas que despertó la oposición de los grandes productores rurales, la creación de un ente planificador de las empresas públicas denominado "corporación Nacional de Empresas del Estado" y la sanción de una legislación sobre inversiones extranjera, que intentaba limitar una mayor transnacionalización del sector industrial. Otros proyectos implicaban una reforma sobre el sistema de salud y de seguridad social. En suma, se trataba de un programa que intensificara el intervencionismo estatal, alentaba una distribución más equitativa del ingreso y proponía medidas favorables para el capital nacional.

El Pacto Social fue un acuerdo entre el gobierno, la CGT y CGE mediante el cual, estas corporaciones aceptaban una tregua en el conflicto por la distribución del ingreso. Luego de un aumento salarial se estableció el congelamiento de los precios y salarios en término de dos años, es decir, hasta junio de 1975.

El Pacto Social era muy parecido al Plan de Emergencias en 1952 y al tipo de acuerdos corporativos. Sin embargo presentaba algunas diferencias notorias. Se impusieron precios máximos sobre un conjunto de productos de primera necesidad, mediante la negociación de un convenio con las grandes empresas, en otros artículos, como la carne y los textiles, el gobierno estableció precios oficiales. Las políticas monetarias y fiscales no fueron coordinadas con el acuerdo de precios.

El Pacto social tuvo mejor recepción que el Plan Trienal, cuya puesta en marcha estuvo sometida a ásperas controversias. La implementación del pacto se vio beneficiada por un contexto internacional y local muy favorable. El incremento de los precios internacionales de los productos primarios y una cosecha record en trigo permitieron revertir el déficit del sector externo. En el ámbito interno, la elección de Campora fue acompañada de algunos temores por parte de las entidades empresariales y de las grandes empresas de capital extranjero. Por último, la

designación de Gerbald y la aplicación de un programa antiinflacionario basado en el acuerdo entre el capital y trabajo fueron recibidas como un mal menor.

Antes de la firma del pacto, muchas empresas habían elevado los precios de manera preventiva, ya que se sospechaba que el nuevo gobierno aplicaría medidas como el congelamiento, esto permitió a los empresarios encarar la negociación con un amplio margen para absorber el incremento de los salarios. La CGT se mostró favorable a un acuerdo de salarios y precios. Aunque la burocracia sindical temía que el congelamiento de los salarios erosionara su dominio sobre las bases, el pacto encuadraba bien en las políticas peronistas de concentración. El gobierno sancionó la ley de asociaciones profesionales, que consolidó la autoridad de la burocracia sobre las organizaciones sindicales.

El plan tuvo efectivo impacto durante la segunda mitad de 1973. Las expectativas inflacionarias se redujeron, la inflación minorista comenzó a desacelerarse, el nivel de actividad superó el registrado previamente y la tasa de desocupación cayó. La actividad económica mostró signos de recuperación, aunque no así la inversión privada. Los éxitos iniciales del pacto condujeron a subestimar los graves problemas resultado de la prolongación de un acuerdo de este tipo, en el marco del estallido de la crisis internacional del petróleo, incluso se llegó a hablar de la meta de inflación cero'.

El fuerte incremento de los precios del petróleo y de otros productos e insumos de importación transmitió las tensiones inflacionarias internacionales a la economía local. La política económica peronista presentaba gran consistencia, ya que al tiempo que se buscaba aplacar la inflación, se había ampliado el gasto público y la oferta de crédito. Se multiplicaron los conflictos laborales. La presión de las bases y amenaza que significaba para la burocracia, impulso a esta a reclamar incrementos de los salarios. Los empresarios respondieron a los precios máximos con desabastecimiento y el surgimiento de un mercado negro. En marzo de 1974, Perón se vio obligado a conceder un aumento salarial y autorizar el traslado del aumento de los costos a los precios finales.

Crisis política y económica. De Gómez Morales a Rodrigo.

El 1 de Julio de 1974 falleció Perón. Con su desaparición física, se extinguía el poder de mediación que había mantenido hasta último momento.

La muerte de Perón ocurrió en medio de un notorio empeoramiento del contexto económico internacional y de la economía argentina. En forma paralela, los enfrentamientos políticos y los conflictos sociales del escenario local se profundizaron. Ello se debió en parte, a la decisión de la presidenta de apoyar el ala derechista del peronismo, encabezada por López Rega. La división del partido oficial se tradujo en el paso a la clandestinidad de Montoneros, un grupo extremista de derecha que operaba con la anuencia oficial. La división también se dio en el interior del gobierno. La lucha enfrentaba a Gerbard con Lopez Rega y los sindicalistas. La

derecha ambicionaba controlar el Ministerio de Economía, en tanto que la burocracia sindical quería desplazar a Gerbard para poner fin a un programa económico que la exponía al cuestionamiento de las bases obreras. Tampoco los grandes empresarios se mostraban proclives a Gerbard y confiaban en su capacidad de presión (de los sindicatos). Gerbard fue reemplazado por Gómez Morales.

En tanto, la economía argentina pasó de un contexto externo muy favorable a uno muy crítico. En julio se anunció el cierre del Mercado Común Europeo para la compra de carnes, a ello se le sumó el fuerte deterioro de los términos de intercambio, provocado por la caída de los precios de exportación y el ascenso de los precios de los insumos importables. Como resultado el superávit comercial de 1973 se redujo. La profundización del gasto público hizo que el déficit fiscal alcanzara el 8% del PBI. La tasa de inflación llegó a 20% anual, porcentaje menor al año previo, pero que de todos modos mostraba la imposibilidad de alcanzar la meta de inflación cero. En 1974, el PBI continuó ascendiendo, la desocupación llegó al nivel mínimo de 2.5%. Aunque algunos síntomas denunciaban problemas mayores: el congelamiento de los precios en un contexto de aumento de los costos estaba comprimiendo las ganancias de sectores productivos. En el ámbito doméstico, se observaban fenómenos como el desabastecimiento y el mercado negro. La persistencia de la inflación y el mantenimiento de un tipo de cambio fijo fortalecieron el atraso cambiario y crearon expectativas devaluatorias.

Aunque la política económica de Gómez Morales intentó corregir algunos de estos aspectos, de ninguna manera configuró un plan ortodoxo. El ministro se negó a devaluar ante el temor del impacto sobre la inflación; en cambio, intentó moderar el gasto público y la política crediticia. La política de precios y salarios se flexibilizó, pero no logró corregir las distorsiones de los precios. La distribución del ingreso se reanudó; el aumento salarial del 13% dispuesto en marzo de 1974 se sumó otro de 13% en noviembre y un tercero del 20% en marzo de 1975; esta medida fue acompañada por la autorización oficial de trasladar el aumento de los costos a los precios.

Pronto, la estrategia gradualista de Gómez Morales se quedó sin apoyo político. En la primera mitad 1975, un nuevo conflicto se desató en el seno del gobierno: el lopezregiano se enfrentó con la burocracia sindical. En principio, la derecha obtuvo la victoria, con la renuncia de Gómez Morales y otros ministros, y su reemplazo por colaboradores ligados al ministro de Bienestar Social.

Neoliberalismo y populismo: el Rodrigazo de 1975

La lucha por el poder se dirimía entre el ala derechista del partido, que rodeaba a Isabel y el movimiento obrero. El propósito de Lopez Rega, era que el gobierno ganara mayor independencia de las bases sindicales; incluso ambicionaba remover a la cúpula sindical dirigente. La coyuntura económica se había agravado y era necesario aplicar medidas impopulares. El ritmo de la inflación de había acelerado y la actividad económica y la inversión habían descendido.

Para corregir los desequilibrios se consideraba imprescindible aplicar una política liberal ortodoxa, que permitiera disciplinar a los actores económicos, equilibrar las cuentas externas y las fiscales, mejorar las condiciones para la inversión y promover las exportaciones agropecuarias. Celestino Rodrigo, un viejo funcionario peronista ligado a Lopez Rega, asumió el ministro de economía junto a Ricardo Zinn, elaboraron un plan de ajuste y estabilización; que incluyó una devaluación del peso del 100%, aumentos de las tarifas de los servicios públicos y un incremento del 180% del precio de la nafta. El denominado `rodrigazo´ implicaba una fuerte redistribución del ingreso a favor del sector exportador y deprimía la actividad productiva ligada al mercado interno. Así la alianza populista se resquebrajó.

El plan fue presentado cuando todavía no habían finalizado las negociaciones paritarias dispuestas por Gómez Morales, Rodrigo ofreció un aumento uniforme del salario, pero la CGT rechazó esta propuesta. Es cierto que los sindicatos peronistas advirtieron que la nueva política económica tenía objetivos más amplios, por ejemplo, marginarlos del gobierno. La CGT presionó y obtuvo de la presidenta la decisión de supeditar a la libre negociación de las partes el aumento de los salarios.

Las entidades empresarias se mostraron muy receptivas a los reclamos obreros y firmaron acuerdos que implicaban aumentos salariales en una escala entre el 60% y el 200%. Era evidente que los empresarios apostaban a una profundización de la crisis económica y política. Los sindicatos de movilizaron a plaza de mayo, convocada para agradecer a Isabel la decisión de no imponer un aumento uniforme de los salarios fue acompañada del reclamo de renuncia de Lopez Rega y sus acólitos. Isabel anuló las paritarias y anunció un aumento uniforme a principios de 1976. Esta decisión provocó una crisis política que se expresó en un paro nacional. Era la primera vez que la CGT realizaba un paro contra el gobierno peronista. Ante la amenaza de perder su principal apoyo político, la presidenta cedió y anunció que los acuerdos serían homologados. Lopez Rega y Rodrigo se vieron obligados a renunciar; el primero debió abandonar incluso el país. Había terminado con la derrota del ala derechista.

Una economía sin rumbo (1975-1976)

Luego del fracaso del plan Rodrigo, la economía argentina se sumergió en una profunda crisis. La explosión inflacionaria creaba una coyuntura muy compleja para la aplicación de políticas consensuadas. En un intento por capear la crisis, Isabel designó a Antonio Cafeiro como ministro de Economía. Su ingreso fue visto por optimismo ya que el nuevo ministro contaba con sólidos lazos con el gremialismo y poseía la cintura política necesaria para tejer nuevas alianzas.

Dos acontecimientos mostraron que las corporaciones no estaban dispuestas a brindar mayor tiempo al gobierno. Las organizaciones empresarias, con excepción de la UIA, retiraron su apoyo a la CGE y constituyeron la Asamblea Permanente de Entidades Empresarias (APEGE). Esta asumió una postura opositora, que en febrero

de 1976 culminaría con un look out patronal. En agosto de 1975, se produjo una crisis militar, que terminó con el desplazamiento del comandante en jefe del Ejército.

El equipo de Cafiero se propuso atacar tres problemas básicos: la alta inflación, el desequilibrio externo y la recesión. El problema más grave era la alta inflación, ya que se originaba en la fuerte puja por la distribución del ingreso entre el capital y el trabajo, y en el interior de cada sector. La distorsión de los precios relativos impulsaba a cada grupo a exigir medidas de excepción para corregir el deterioro de sus ingresos. El gobierno había perdido toda capacidad de mediación y control de la inflación. Cafiero impuso una indexación trimestral de los salarios, el aumento de los precios de algunos bienes y servicios y, para poner fin a los subsidios implícitos, la indexación de los préstamos y las deudas fiscales. Se buscaba así evitar una nueva aceleración del ritmo de escalada de los precios. En el ámbito externo, se intentó mantener el tipo de cambio mediante minidevaluaciones quincenales. Además se iniciaron negociaciones con el FMI, para que fuera beneficiario de préstamos que ese organismo otorgaba para compensar la caída de las exportaciones y el aumento de los precios del petróleo.

En los meses siguientes, la CGT y los sindicalistas peronistas continuarían apoyando al gobierno, aunque sin lograr impulsar una estrategia política-económica que evitara el esperado golpe militar. En enero de 1976 la presidenta reemplazó a Cafiero por Emilio Mondelli, convirtiéndose en el sexto ministro de economía del tercer gobierno peronista. Mondelli anunció un nuevo plan de emergencia, consistía en la tregua social de 180 días, la unificación del mercado cambiario y una nueva devaluación monetaria, aumentos en las tarifas de los servicios públicos y los combustibles, un incremento salarial y la acentuación del control de precios. Tres semanas después el 24 de marzo, las fuerzas armadas tomaron el poder.

Los sectores de la producción La expansión de la agricultura pampeana

Durante la mitad de la década de 1960, el agro pampeano continuó recuperándose del estancamiento iniciado en 1930. La adopción de nuevas técnicas agrícolas, la tractorización y el empleo cada vez más intensivo de maquinarias y cosechadoras consolidaron el incremento de la producción agrícola.

Este proceso se acentuó en la década del 70, alentado por la introducción de semillas mejoradas de maíz, trigo y girasol y la difusión del cultivo de soja y de las nuevas formas de utilización del suelo. Se sumaron nuevos avances en el uso de quipos y la utilización intensiva de herbicidas y pesticidas; permitieron el aumento de sus rendimientos: el valor de la producción agrícola se duplicó con respecto a los primeros años de la misma década. No obstante, dicho proceso fue desigual: no tuvo mayor impacto en la superficie cultivada, pero sí fue notable la productividad.

La expansión agrícola fue general, pero el ritmo de crecimiento fue mayor en el rubro de oleaginosas que en los cereales. El hecho que la expansión se basara en el aumento de la productividad de la tierra permitió que fuera acompañada de un

incremento de la producción ganadera. Recién a partir de 1977 se iniciaría un período de retracción ganadera a favor de la expansión agrícola.

En 1968 el fin de las prórrogas sucesivas a los arrendamientos acentuó la crisis de las explotaciones familiares y fortaleció el nacimiento de nuevos actores sociales: los contratistas.

Los contratistas de labores y de cosechas recorrían la recién con maquinarias de su propiedad, cobrando tarifas por su tarea o bien recibiendo un porcentaje de lo cosechado. Los contratistas tamereros, cultivaban la tierra durante un año y abonaban una renta en porcentaje de la cosecha.

La expansión agraria tuvo lugar en un contexto macroeconómico de enorme inestabilidad, por la imposición de retenciones, bruscos cambios en el tipo de cambio real y movilidad de los precios mundiales. Esos factores repercutieron en forma negativa sobre los ingresos de los productores, acompañados por importantes retenciones al sector. Se le sumó la ley 18.033, que estableció por tres años el impuesto a las Tierras Aptas para la explotación agropecuaria, fue el único impuesto nacional sobre la tierra de aplicación efectiva en la historia argentina. Un cambio de peso fue el fin de las prórrogas a los arrendamientos, lo cual condujo a que el conflicto entre propietarios y arrendatarios dejara de ser el centro de disputas sectoriales. Si bien durante el tercer gobierno peronista las retenciones volvieron a incrementarse, el fuerte despegue de los precios internacionales de la carne y los cereales evitó que se viera afectada la rentabilidad del sector, al menos por un tiempo. Otra iniciativa del gobierno peronista fue la sanción de la ley que establecía el impuesto a la renta potencial de la tierra; gravar a los propietarios de las tierras improductivas. Hasta que se lograra implementar se gravamen, se estableció otro a la tierra libre de mejoras. Estos impuestos fueron mal recibidos por los productores y finalmente serían anulados por la dictadura militar en 1976. Una polémica mayor provocó el proyecto de la ley agraria que disponía la expropiación de las tierras improductivas. El proyecto fue rechazado por todas las entidades agrarias.

La expansión de la agricultura pampeana y la mejora de los precios internacionales permitieron ampliar las exportaciones argentinas.

La crisis de las economías regionales

¿Cómo se adaptaban las economías regionales a los bruscos cambios de las Políticas Económicas?

Estas economías ya venían sufriendo cambios notorios. Luego de la caída de Perón en 1955, se inició un período en el cual los gobiernos comenzaron a dismantlar las políticas de intervencionismo y regulación de la producción. Otras regiones, marginales hasta ese momento, fueron objeto de mayor atención mediante planes destinados a fomentar el desarrollo. El ejemplo típico fue la Patagonia, donde la explotación de petróleo alentada por el desarrollismo, sumada a la construcción de

grandes obras públicas, convirtieron a la región en un nuevo polo de atracción de las migraciones internas y de la inmigración (chileno y boliviano).

Los movimientos de la población constituyen un indicador de las capacidades de transformación de las economías regionales. Durante 1960 y 1970, las regiones del Noroeste y del Noreste expulsaron población hasta otras regiones como la pampeana y la patagónica.

El desempeño de las economías regionales dependió de factores diversos. Como la producción orientada en forma predominante hacia el mercado interno, la evolución de la demanda doméstica constituía un límite de peso para las posibilidades económicas del interior. Los productos que ya cubrían la demanda local debieron enfrentar más tempranamente el peligro de la sobre producción y la crisis regional. La expansión de la producción estaba limitada por el crecimiento vegetativo de la población, que venía declinando.

Ninguna economía del interior sufrió una crisis tan profunda y prolongada como la tucumana.

Especialmente en el cultivo de caña de azúcar, sufría la competencia de Salta y Jujuy, donde los productores alcanzaban rendimientos por hectáreas muy superiores. La expansión de los cultivos llegó a su nivel máximo a mediados de la década del 50. De inmediato se produjo una crisis de sobreproducción y los precios se derrumbaron. La depresión golpeó con fuerza un grupo de ingenios que ya mostraban un severo proceso de descapitalización, un alto índice de endeudamiento bancario y una situación patrimonial muy comprometida.

La recesión provocó un agudo conflicto social y político. Una de las primeras medidas de Onganía en 1966 fue, el cierre de 8 ingenios y prohibió la instalación de nuevas fábricas. Otra ley se propuso disminuir la producción y reconvertir a los pequeños productores de caña hacia otros cultivos. Estas medidas tuvieron graves consecuencias y condujeron al desplazamiento de la actividad y una caída de la producción. La crisis de Tucumán se prolongó, a pesar de los programas oficiales que buscaron estimular la sustitución del azúcar por nuevos cultivos y la implantación de industrias. La crisis social alentó al Ejército Revolucionario del Pueblo a implantar un 'foco' en la región. A partir de 1975, la provincia fue sometida a una violenta represión militar, en el marco del operativo 'independencia'.

La economía del algodón, en chaco, también fue afectada por una crisis militar, la superficie cultivada había alcanzado su nivel máximo en 1957-1958. El en el siguiente decenio, los precios declinaron y el área se contrajo. La presencia de productores minifundistas, la falta de títulos de propiedad sobre las tierras, la dependencia de un grupo concentrado de empresas textiles y la debilitada autoridad de la junta nacional del algodón alentaron a nuevos reagrupamientos sociales en torno a las ligas agrarias. Las ligas se radicalizaron y llegaron a cuestionar el régimen de propiedad de tierra; la instauración de la dictadura en 1976 puso fin a este proceso. El incremento

de los precios internacionales, la libración de aranceles a las exportaciones y la mejora en la calidad de la fibra permitieron el incremento de las exportaciones. A fines de los años setenta estalló una severa crisis provocada por la combinación de la caída de los precios internacionales, el atraso cambiario y las altas tasas de interés. Entonces, se intentó reorientar la producción hacia otros productos, aunque sin éxito ya que el tamaño de las exportaciones impedía este cambio. En tanto, los productores continuaban cultivando algodón o bien abandonaban sus exportaciones.

Los casos de Tucumán y Chaco pusieron de manifiesto el estallido de crisis tempranas, debido a ciertos factores estructurales y tensiones que venían acumulándose desde tiempo atrás. En cambio, en otros casos, la década de 1965-1975 no estuvo caracterizada por la crisis, sino por nuevos ciclos de expansión. Esto sucedió con los cultivos de tabaco en Salta y Jujuy, la explotación forestal y el cultivo de la yerba mate y el tung en Misiones, y el cultivo de la vid en Mendoza y San Juan.

El apogeo de la industrialización por sustitución de importaciones

Luego de la crisis de 1962, la industria manufacturera inició una etapa de expansión ininterrumpida. Entre 1963 y 1974, la producción industrial, el empleo y la producción crecieron. Este período mostro las capacidades de transformación del sector, y al mismo tiempo, develó algunos de los límites. Las industrias líderes fueron las productoras de bienes de consumo durables, equipos y productos básicos, conocidas como 'industrias dinámicas' ya que se desarrollaban a un ritmo mayor, debido a que la demanda doméstica continuaba siendo importante y existían márgenes para la sustitución de importación. En aquellos sectores que habían protagonizado la etapa 'fácil' de la industrialización por sustitución de importaciones. En 1974 la rama metalúrgica continuaba representando un tercio del PBI.

Entre las industrias dinámicas, el complejo automotor siguió cumpliendo un rol central. El incremento del 50% en solo cinco años tuvo lugar en un contexto marcado por cambios destacables en la legislación de promoción sectorial y el recrudecimiento de conflictos entre las terminales y las empresas autopartistas, muchas de ellas de capital local.

El despliegue de la producción industrial y los avances en el proceso de integración vertical se debieron a la maduración de las inversiones llevadas a cabo durante el periodo desarrollista y a nuevas inversiones realizadas durante los años de Krieger Vasena. Economistas e ingenieros veían necesario modificar el sector manufacturero. La política industrial del Onganiato se propuso profundizar la eficiencia del sector industrial, en 1967, se llevó a cabo la reforma aduanera que redujo el nivel de protección y mejoró su estructura. El banco industrial reorientó su operatoria a financiar créditos de largo y mediano plazo para la importación de equipos y maquinarias y apoyar mediante avales, proyectos para la instalación de plantas productoras de insumos siderometalúrgicos y químicos básicos. La estabilización económica permitió que se aplicaran los regímenes de promoción de las

exportaciones industriales, que incluían incentivos como tipos de cambio diferenciales y créditos destinados a financiar las compras desde el extranjero.

Las firmas extranjeras poseían grandes ventajas frente a las empresas argentinas. De manera que no resultó sorprendente que muchos empresarios argentinos decidieran desprenderse de sus activos frente a la amenazante competencia de las firmas extranjeras.

La denominada 'desnacionalización'. Se sancionaron leyes que introdujeron diversos controles al capital extranjero y prohibieron su ingreso en algunos sectores de la economía. El censo de 1974 reveló un aumento del capital extranjero en la producción industrial, que ascendió desde 25% en 1964 al 30% una década más tarde. Las ramas más dinámicas esta participación se elevaba hasta el 50%. En algunas industrias como la automotriz, la fabricación de fibras artificiales y sintéticas y otras, que alcanzaron desde el 60% y el 99%.

Luego de la renuncia de Krieger Vasena y la reanudación del proceso inflacionario, las políticas sectoriales intentaron continuar privilegiando los objetivos de una mayor integración de la estructura industrial y la exportación de artículos manufacturero. Pero los problemas coyunturales derivados de la inflación y la puja distributiva inhibieron el impacto de esas políticas. Un caso típico fue la creación del banco nacional de desarrollo, creado en 1971 que continuó promoviendo los grandes proyectos industriales pero prestó una mayor atención a las empresas en dificultades. En 1969 se sancionó la ley de Rehabilitación de Empresas, en la cual el estado se proponía evitar la quiebra de aquellas que las autoridades consideraban de mayor trascendencia. Los sucesivos gobiernos terminaron incorporando al régimen a más de doscientas, muchas de las cuales quedaron en mano del estado.

A comienzos de la década de 1970, la industria argentina mostraba signos de maduración de las capacidades gerenciales y tecnológicas que venían desarrollándose desde décadas atrás. Grande y medianas empresas importaban tecnología, la adaptaban e incluso la mejoraban; algunas comenzaron a exportar productos y otras lograron vender plantas 'llave en mano'. En 1960, las exportaciones industriales representaban solo un 3% del valor total; diez años más tarde, habían ascendido al 6% en 1974 alcanzaron un 24% del valor total. Se vendían al extranjero cosechadoras, bienes de capital, automóviles, productos químicos y petroquímicos, y laminados de acero. Este proceso era resultado de la maduración del sector industrial y de la puesta en marcha del incentivo a las exportaciones, como la devolución de derechos, tipos de cambio diferenciables, créditos y la financiación de las ventas en el exterior.

La modernización de la sociedad y sus límites

Las transformaciones económicas de las décadas de 1960 y 1970 produjeron notables cambios en la sociedad y, se puso en evidencia la capacidad de incorporación e integración social de la industrialización orientada al mercado

interno. La población ascendió de 20 millones de habitantes a 23,3 millones, con una tasa anual de crecimiento del 15,4. La urbanización continuó ascendiendo, Buenos Aires y sus alrededores acentuaron su peso demográfico.

La expansión urbana se vio favorecida por el dinamismo del sector terciario, especialmente el comercio y los servicios personales, este sector acentuó su dominante sector en la PEA. La industria y el agro continuaron perdiendo peso en la ocupación de la PEA. La ampliación y diversificación del sector de servicios permitió un notable incremento de la clase media asalariada, con mayor énfasis entre los profesionales y los técnicos. En los sectores bajos, si bien el número de obreros en los sectores bajos se estancó, aumentaron los asalariados de servicios, el transporte y la construcción.

La expansión económica, la modernización de la industria y los aumentos de la productividad estuvieron acompañados de una declinación de la participación de los trabajadores en la distribución del ingreso. Esta descendió durante el gobierno de Frondizi debido a la aplicación de las políticas económicas ortodoxas. El proceso se revirtió a partir de 1963, llegó al 50% a finales de la década de 1960. De cualquier manera, la evolución del salario real muestra un lento incremento, del 10%, muy menor a los aumentos de la productividad, esto pone en evidencia una profundización notable de las distancias sociales. Para cubrir las necesidades de una familia, se volvió común la incorporación al mercado de trabajo de varios de sus miembros, incluso entre las clases medias bajas.

En 1970, la sociedad argentina mostraba signos de maduración y modernización con altos niveles de urbanización, comportamiento demográfico propio de las sociedades desarrolladas, el predominio del sector terciario, niveles de vida relativamente altos y en algunos sectores sociales, patrones de consumo más sofisticados, como la adquisición de un automóvil o el disfrute de vacaciones anuales. Con el lento aumento de salarios reales, una participación de los trabajadores en la distribución del ingreso algo menos a la alcanzada durante el peronismo clásico, aumento del empleo precario, y en las grandes ciudades, la expansión de las villas miseria, que ponía en evidencia el deterioro creciente de los servicios sanitarios y educacionales públicos, y los problemas habitacionales.

Conclusión

La economía argentina liderada por el sector industrial inicio un ciclo de crecimiento que, con breves interrupciones, continuaría durante una década. Producto de la conjunción de factores internacionales y locales favorables, la mejora de los precios mundiales de los productos de exportación, incremento de la producción y la maduración de las transformaciones productivas y tecnológicas en el sector industrial.

En cuanto a las políticas económicas, el gobierno de la "Revolución Argentina" se propuso alcanzar la estabilidad económica, reducir y mejorar la intervención estatal

sobre los mercados y profundizar la eficiencia y competitividad del sector manufacturero. La política económica de Krieger Vasena y de Dagnino Pastore se centró en el congelamiento de precios y salarios, el aliento a las inversiones extranjeras, y el crecimiento de inversiones públicas en grandes obras de infraestructura, imprescindibles para la implantación de nuevas industrias de insumos básicos. El resultado fue un gran desarrollo de la producción, al tiempo que se acentuaba la transnacionalización y dependencia tecnológica. El proyecto económico del Onganiato no parecía proponer fórmulas que permitieran superar la crisis y el estancamiento de algunas economías regionales. El Cordobazo y el inicio de un ciclo de movilización y radicalización.

Desde 1970, la política económica abandono el enfoque eficientista a favor de una mayor intervención estatal, el controlador de la inversión extranjera, el aliento a las empresas argentinas y en menor medida, una distribución más equitativa del ingreso.

Algunos de los problemas de la época fueron: la reanudación de la carrera entre precios y salarios, el aumento del deficit fiscal y el desequilibrio de la balanza de pagos como resultado del fuerte endeudamiento externo se reanudaron con mayor fuerza. Si bien la dictadura intentó dar alguna respuesta, no fue sino luego del retorno del peronismo al poder que se pusieron en marcha las políticas más integrales en este plano.

En principio, el plan trienal y el pacto social brindaron respuestas a los problemas de corto y mediano plazo. El empeoramiento de las condiciones mundiales y la falta de consistencia entre los objetivos propuestos y la instrumentación de las políticas macroeconómicas condujeron al fracaso del enfoque. La fragilidad de la restauración institucional y el reinicio de los conflictos entre actores diversos empujaron a la adopción de políticas económicas de corto plazo. En un giro hacia el enfoque liberal, el Rodrigazo llevó a la economía hacia la hiperinflación y la recesión.

A mediados de la década de 1970 la estructura económica exhibía los rasgos de un largo y complejo sendero de desarrollo e industrialización. La industria gozaba de una alta protección con un crecimiento impulsado por la demanda doméstica pero algunos sectores mostraban mayor dinamismo, y capacidad tecnológica y competitiva.

El sendero de la industrialización quedaría trunco. Los desequilibrios macroeconómicos conducirían a adoptar políticas económicas que transformarían las condiciones en que la economía argentina venía desarrollándose desde los años treinta.